



# Asamblea General

Distr. general  
2 de octubre de 2020  
Español  
Original: francés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones (24 a 28 de agosto de 2020)

#### Opinión núm. 40/2020, relativa a Jean Claude Hamenyimana (Burundi)\*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 25 de marzo de 2020 al Gobierno de Burundi una comunicación relativa a Jean Claude Hamenyimana. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

\* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. Jean Claude Hamenyimana es un ciudadano burundés nacido en 1990. Es comerciante y, desde su puesta en libertad el 2 de mayo de 2019, reside en Kimisagara (Rwanda).

#### a) Detención y reclusión

5. Según la fuente, el Sr. Hamenyimana fue detenido el 19 de enero de 2016, alrededor de las 14.30 horas, en Jabe, en la comuna de Mukaza de la ciudad de Bujumbura, por agentes de policía de la Unidad de Apoyo a la Protección de las Instituciones y la Brigada de Investigación e Intervención Judicial. Los agentes, que al parecer no mostraron ninguna orden judicial, se presentaron en el domicilio del Sr. Hamenyimana, que estaba durmiendo, y le preguntaron por el paradero de unas personas que habían disparado a la policía. Aunque el Sr. Hamenyimana dijo que no sabía nada, los metieron a él y a un empleado suyo en una furgoneta con otras personas que estaban allí amontonadas y tumbadas boca abajo con las manos atadas.

6. La fuente señala que, a su llegada a las dependencias del Servicio Nacional de Inteligencia, las personas detenidas fueron golpeadas y torturadas durante más de tres horas con, entre otros instrumentos, barras de armadura de hormigón y bayonetas. La fuente explica que algunos de los autores iban vestidos de civil y otros llevaban uniforme militar o de policía. Durante la paliza, interrogaron a los detenidos sobre la identidad de quienes habían disparado a la policía e hicieron comentarios odiosos sobre su origen étnico. Por ejemplo, los autores de la paliza se decían unos a otros que debían “apuntar a la zona lumbar para dejarlos estériles, porque su etnia engendra rebeldes valientes”.

7. La fuente explica que, por la noche, los agentes de la policía judicial interrogaron al Sr. Hamenyimana sobre su implicación en un movimiento de insurgencia o de rebelión. El Sr. Hamenyimana negó toda implicación y les explicó las condiciones en que había sido detenido. Cuando terminó el interrogatorio, el Sr. Hamenyimana fue esposado y encerrado en una celda del Servicio Nacional de Inteligencia, donde permaneció una semana. Según la fuente, solamente le quitaban las esposas para ducharse. No tenía colchón y dormía en el suelo de cemento. El Sr. Hamenyimana compartió esa celda con otras 12 personas. La fuente especifica que no recibió ningún tratamiento a pesar de las lesiones causadas por las palizas.

8. El 26 de enero de 2016, el Sr. Hamenyimana fue llevado ante el fiscal para declarar. Luego fue trasladado a la cárcel de Mpimba. El 27 de junio de 2017 lo trasladaron a la cárcel de Ngozi.

9. En febrero de 2016, el Sr. Hamenyimana fue citado a comparecer ante el tribunal de primera instancia de Ntahangwa en una audiencia a puerta cerrada. La fuente explica que el Sr. Hamenyimana rechazó las acusaciones de la fiscalía y negó haber disparado y lanzado bombas a los agentes de policía. Señala además que, en la audiencia a puerta cerrada, el Sr. Hamenyimana informó al juez de los actos de tortura que había sufrido en las dependencias del Servicio Nacional de Inteligencia. No obstante, al parecer el juez ordenó que permaneciera en prisión. El Sr. Hamenyimana recurrió la decisión adoptada en la audiencia a puerta cerrada ante el Tribunal de Apelación de Mukaza, al que explicó nuevamente las condiciones en que había sido detenido, la puesta en libertad de su empleado el mismo día a pesar de que ambos habían sido detenidos en las mismas condiciones, y la tortura que había sufrido. El Tribunal de Apelación de Mukaza ordenó su libertad provisional, pero no se ejecutó esa decisión.

10. La fuente también indica que el tribunal de primera instancia de Mukaza dictó sentencia sobre el fondo del asunto y absolvió al Sr. Hamenyimana, a quien se notificó la sentencia el 8 de agosto de 2017. No obstante, este no fue puesto en libertad hasta el 2 de mayo de 2019, casi dos años después de su absolución.

b) Análisis jurídico

i. Categoría I

11. La fuente sostiene que la detención del Sr. Hamenyimana fue arbitraria por varias razones, siendo la primera la falta de fundamento jurídico que la justifique con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, al que el Estado de Burundi se adhirió el 9 de mayo de 1990.

12. En el presente caso, la fuente alega que no se siguió ningún procedimiento de detención, ya que cuando detuvieron al Sr. Hamenyimana no se le mostró ninguna orden ni ningún otro documento que justificara la detención. El Sr. Hamenyimana no supo que se había dictado una orden de detención en su contra para trasladarlo a la cárcel de Mpimba, y que se le acusaba de atentar contra la seguridad nacional del Estado, hasta el 26 de enero de 2016. La fuente concluye que, desde el 19 de enero de 2016 —fecha de su detención— hasta el 26 de enero de 2016, la prisión preventiva del Sr. Hamenyimana careció de todo fundamento jurídico.

13. Además, la fuente indica que el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal establece que “habida cuenta de que la libertad es la norma y la detención la excepción, solo podrá ordenarse la prisión preventiva del acusado si existen pruebas suficientes de su culpabilidad y los actos que se le imputan son susceptibles de constituir un delito punible por la ley con una pena de prisión de al menos un año”. No obstante, la fuente insiste en que el Sr. Hamenyimana fue detenido sin que hubiera el menor indicio de su implicación en el delito del que se le acusaba. Afirma a este respecto que el Sr. Hamenyimana estaba en la cama cuando la policía lo detuvo. La falta de pruebas de su culpabilidad queda ilustrada por el hecho de que no se formularan cargos contra él durante la instrucción. La fuente recuerda en este sentido que el Sr. Hamenyimana fue absuelto por el juez competente en cuanto al fondo el 8 de agosto de 2017 y permaneció recluido sin ningún fundamento jurídico hasta el 2 de mayo de 2019, en contravención del artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. La fuente sostiene que, habida cuenta de lo que antecede, la reclusión del Sr. Hamenyimana debe considerarse una privación arbitraria de la libertad con arreglo a la categoría I.

ii. Categoría III

14. Según la fuente, de los hechos se desprende que el procedimiento al que se sometió al Sr. Hamenyimana adoleció de numerosas irregularidades que contravienen la legislación de Burundi y las normas internacionales relativas al derecho a la libertad y seguridad personales y al derecho a un juicio imparcial. La acumulación de esas irregularidades privó al Sr. Hamenyimana del amparo de la ley, por lo que dichas vulneraciones revisten una gravedad tal que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario.

15. Por una parte, la fuente alega que se vulneraron las normas y garantías procesales al detener al Sr. Hamenyimana porque no se le mostró ninguna orden de detención.

16. Por otra parte, la fuente señala que el Sr. Hamenyimana no dispuso de asistencia letrada durante el juicio. De hecho, se le privó del derecho fundamental a ser asistido por un abogado en los procedimientos judiciales. El Sr. Hamenyimana no contó con dicha asistencia cuando lo interrogó el Servicio Nacional de Inteligencia, ni posteriormente al comparecer ante la Fiscalía de la ciudad de Bujumbura, pese la obligación legal de proporcionarle dicha asistencia establecida en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal. La fuente sostiene que se volvió a vulnerar ese derecho durante el interrogatorio ante el juez de instrucción y durante la audiencia a puerta cerrada.

17. La fuente concluye, por tanto, que las irregularidades de procedimiento de que fue víctima el Sr. Hamenyimana vulneraron su derecho a un juicio imparcial y son de una

gravedad tal que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario conforme a la categoría III.

iii. Categoría V

18. La fuente alega que el origen étnico del Sr. Hamenyimana influyó en la “represión” de la que fue objeto. En apoyo de esa alegación, recuerda que las observaciones formuladas contra el Sr. Hamenyimana y las demás personas detenidas, según las cuales había que apuntar a la zona lumbar para dejarles estériles porque su etnia estaba criando rebeldes valientes, son prueba suficiente de odio basado en el origen étnico. La fuente destaca que los términos utilizados recuerdan a los discursos de odio de algunas autoridades políticas.

*Respuesta del Gobierno*

19. El 25 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió una comunicación al Gobierno en relación con el Sr. Hamenyimana, en la que le pidió que proporcionara información detallada sobre este a más tardar el 25 de mayo de 2020. Más concretamente, le pidió que aclarara cuáles eran las disposiciones jurídicas que justificaban su mantenimiento en reclusión, así como la compatibilidad de estas con las obligaciones que incumben a Burundi en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular con los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que velara por la integridad física y mental del Sr. Hamenyimana.

20. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta alguna a esa comunicación por parte del Gobierno, que tampoco solicitó que se prorrogara el plazo de respuesta conforme a los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. Observa con preocupación que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas en el presente caso y en otras comunicaciones en el marco del procedimiento ordinario en los últimos años<sup>1</sup>. De hecho, el Gobierno no ha respondido al procedimiento de comunicación ordinario del Grupo de Trabajo desde 2012. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno a que colabore de manera constructiva con él en todas las denuncias relativas a la privación arbitraria de libertad.

**Instrucción**

21. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

22. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

23. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, se reserva el derecho de decidir, caso por caso, si la privación de libertad es arbitraria o no, a pesar de la puesta en libertad de la persona interesada. En el presente caso, las circunstancias —incluidas las alegaciones de que el Sr. Hamenyimana fue víctima de graves violaciones de los derechos humanos— son tales que el Grupo de Trabajo considera que sigue siendo pertinente emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad del Sr. Hamenyimana, aunque fuera puesto en libertad el 2 de mayo de 2019.

24. La fuente afirma que la detención y la reclusión del Sr. Hamenyimana fueron arbitrarias y se inscriben en las categorías I, III y V. El Grupo de Trabajo examinará las alegaciones de la fuente por separado.

<sup>1</sup> Véanse las opiniones núms. 25/2020, 37/2019, 7/2018, 54/2017, 8/2016, 30/2015, 33/2014 y 14/2013.

*Categoría I*

25. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Hamenyimana fue arrestado el 19 de enero de 2016 sin orden de detención y sin que se le informara debidamente en ese momento de los motivos de su privación de libertad. El Sr. Hamenyimana no supo que se había dictado una orden de detención en su contra para trasladarlo a la cárcel de Mpimba, y que se le acusaba de atentar contra la seguridad nacional del Estado, hasta el 26 de enero de 2016. El Gobierno no ha refutado esas alegaciones.

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Para que la privación de libertad tenga un fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención<sup>2</sup>. El Grupo de Trabajo concluye que la detención sin orden judicial del Sr. Hamenyimana constituye una violación del derecho que le asiste en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto y del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

27. Además, la jurisprudencia invariable del Grupo de Trabajo establece que la prisión preventiva es excepcional y debe ser individualizada y motivada<sup>3</sup>. El tribunal de primera instancia de Ntahangwa rechazó la solicitud de libertad provisional del Sr. Hamenyimana en febrero de 2016. No obstante, en una resolución de 23 de agosto de 2016, de la que la fuente proporcionó una copia al Grupo de Trabajo, el Tribunal de Apelación de Mukaza revocó parcialmente el auto dictado en primera instancia y ordenó la puesta en libertad provisional del Sr. Hamenyimana. La fuente señala que, sin embargo, esa decisión no llegó a ejecutarse y que el Sr. Hamenyimana permaneció en prisión preventiva a pesar de sus intentos de que se diera cumplimiento de la resolución. El Gobierno no ha refutado esta alegación, que además viene corroborada por la documentación que proporciona la fuente. El Grupo de Trabajo concluye que la continuación de la reclusión del Sr. Hamenyimana, a pesar de la resolución por la que se ordenaba su puesta en libertad, no tiene ningún fundamento jurídico y constituye una segunda contravención del artículo 9, párrafo 1, del Pacto<sup>4</sup>.

28. Por otra parte, el Sr. Hamenyimana fue absuelto en una sentencia sobre el fondo del asunto dictada por el tribunal de primera instancia de Mukaza, que le fue notificada el 8 de agosto de 2017 y de la que la fuente ha proporcionado una copia al Grupo de Trabajo. Esta sentencia tampoco se ejecutó y el Sr. Hamenyimana permaneció recluso hasta el 2 de mayo de 2019, casi 21 meses después de la absolución. La continuación de la reclusión del Sr. Hamenyimana después de su absolución constituye una vulneración flagrante del derecho a ser juzgado o puesto en libertad reconocido en el artículo 9 del Pacto<sup>5</sup>.

29. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Hamenyimana compareció ante el fiscal el 26 de enero de 2016. Como ya ha destacado el Grupo de Trabajo, la fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial a los efectos del artículo 9, párrafo 3, del Pacto<sup>6</sup>. Además, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Hamenyimana no ha podido impugnar su detención con arreglo al artículo 9, párrafo 4, del Pacto porque no tuvo acceso a un abogado cuando compareció ante el fiscal. El acceso a un abogado desde el principio de la detención es una garantía esencial para que la persona detenida pueda impugnar el fundamento

<sup>2</sup> Opiniones núms. 25/2020, párr. 34; 46/2018, párr. 48; 36/2018, párr. 40; 10/2018, párr. 45; y 38/2013, párr. 23.

<sup>3</sup> Véase opinión núm. 62/2017. Véanse también la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 38; y A/HRC/19/57, párrs. 53 a 56.

<sup>4</sup> Observación general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos, párr. 41.

<sup>5</sup> *Ibid.*, párr. 41.

<sup>6</sup> Opiniones núms. 5/2020, párr. 72; 45/2019, párr. 52; y 14/2015, párr. 28. Véase también la observación general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos, párr. 32.

jurídico de su detención<sup>7</sup>. Por consiguiente, no se ha establecido el fundamento jurídico de la detención del Sr. Hamenyimana ni con arreglo al artículo 9, párrafo 3, ni con arreglo al artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

30. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y la reclusión del Sr. Hamenyimana carecieron de fundamento jurídico, por lo que fueron arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

### *Categoría III*

31. En relación con la categoría III, la fuente indica que se privó al Sr. Hamenyimana del derecho a recibir asistencia letrada durante las actuaciones judiciales. Afirma que el Sr. Hamenyimana no contó con la asistencia de un abogado cuando fue interrogado en las dependencias del Servicio Nacional de Inteligencia, durante el interrogatorio ante el juez de instrucción ni en la audiencia a puerta cerrada. A falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que las alegaciones de la fuente son dignas de crédito.

32. El Grupo de Trabajo recuerda que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a ser asistidas por un abogado de su elección en cualquier momento durante su privación de libertad, en particular inmediatamente después de su detención, y que ese acceso se debe facilitar sin demora<sup>8</sup>. A la luz de los hechos, el Grupo de Trabajo concluye que se ha vulnerado el derecho del Sr. Hamenyimana a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, previsto en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, así como su derecho a defenderse de manera eficaz por conducto de un defensor de su elección, previsto en el artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto.

33. El Grupo de Trabajo considera asimismo que el Sr. Hamenyimana ha presentado indicios razonables, que el Gobierno no ha refutado, de haber sido sometido a actos de tortura y malos tratos en las dependencias del Servicio Nacional de Inteligencia, en contravención de la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa de derecho internacional, del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 7 del Pacto y de los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Burundi es parte. Además, el Grupo de Trabajo considera que la tortura y los malos tratos denunciados mermaron gravemente la capacidad del Sr. Hamenyimana de participar en su propia defensa, lo que vulneró su derecho a la igualdad de medios procesales reconocido en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

34. El Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones son de tal gravedad que confiere a la privación de libertad del Sr. Hamenyimana carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

### *Categoría V*

35. La fuente alega que el origen étnico del Sr. Hamenyimana influyó en los malos tratos que sufrió cuando fue detenido. Tras su detención, la fuente afirma que el Sr. Hamenyimana fue golpeado y torturado durante más de tres horas con, entre otros instrumentos, barras de armadura de hormigón y bayonetas. Al parecer, los agentes responsables también lo insultaron con expresiones de odio relacionadas con el origen étnico del Sr. Hamenyimana y de las demás personas detenidas. Por ejemplo, la fuente menciona que los agentes especificaron que había que golpear a los detenidos en la zona lumbar “para dejarlos estériles, porque su etnia engendra rebeldes valientes”.

<sup>7</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 y directriz 8.

<sup>8</sup> Observación general núm. 32 (2007), del Comité de Derechos Humanos, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párrs. 32 a 34; y Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8.

36. El Grupo de Trabajo recuerda que, cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos, la detención es arbitraria. También observa que uno de los factores que permiten determinar el carácter discriminatorio de una privación de libertad es si las autoridades hacen afirmaciones a la persona detenida que indiquen una actitud discriminatoria<sup>9</sup>.

37. El Grupo de Trabajo recuerda sus opiniones núms. 25/2020 y 7/2018, en las que concluyó que las fuerzas del orden de Burundi practicaban la discriminación por motivos de origen étnico, y la falta de refutación por parte del Gobierno, por lo que considera que las alegaciones del Sr. Hamenyimana son creíbles. Las afirmaciones de los agentes mientras golpeaban al Sr. Hamenyimana demuestran que su detención y su privación de libertad obedecieron a una discriminación por su origen étnico. Esta causalidad resulta aún más concluyente si se tiene en cuenta la naturaleza de las afirmaciones discriminatorias y su relación con las acusaciones formuladas contra el Sr. Hamenyimana por su presunta pertenencia a un grupo rebelde. El Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Hamenyimana contraviene los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto. Por consiguiente, estima que la detención y la reclusión del Sr. Hamenyimana fueron arbitrarias en el sentido de la categoría V.

38. El Grupo de Trabajo también toma nota de las alegaciones de la fuente, que no han sido refutadas por el Gobierno, de que el Sr. Hamenyimana fue esposado y encerrado en una celda del Servicio Nacional de Inteligencia, donde permaneció durante una semana. Según la fuente, solo le quitaban las esposas para ducharse. No tenía colchón y dormía en el suelo de cemento. El Sr. Hamenyimana compartió esa celda con otras 12 personas. La fuente señala además que el Sr. Hamenyimana no recibió ningún tratamiento a pesar de las lesiones causadas por las palizas. El Grupo de Trabajo aprovecha esta oportunidad para recordar al Gobierno su obligación, establecida en el artículo 10, párrafo 1, del Pacto, de velar por que todas las personas privadas de libertad sean tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente.

39. Este es uno de los muchos casos sometidos al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en Burundi<sup>10</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad que vulneren las normas de derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad<sup>11</sup>.

## Decisión

40. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Jean Claude Hamenyimana es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

41. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Burundi que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Hamenyimana sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

42. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Hamenyimana el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

<sup>9</sup> A/HRC/36/37, párr. 48.

<sup>10</sup> Véanse las opiniones núms. 56/2020, 55/2020, 25/2020, 37/2019, 7/2018, 54/2017, 8/2016, 30/2015 y 33/2014.

<sup>11</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2012, párr. 22.

43. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Hamenyimana y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

44. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

45. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

#### **Procedimiento de seguimiento**

46. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Hamenyimana;

b) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Hamenyimana y, de ser así, el resultado de la investigación;

c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Burundi con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

47. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

48. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

49. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>12</sup>.

*[Aprobada el 25 de agosto de 2020]*

<sup>12</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.